

## CAMBIOS RECIENTES EN LA SOCIEDAD RURAL

### PRESENTACIÓN

Este *dossier* es el resultado parcial de un proceso de investigación colectiva del Núcleo de Estudios Sociales Agrarios (NESA), sobre las transformaciones del mundo agrario en este nuevo siglo, a partir de miradas disciplinarias distintas y atendiendo en profundidad a diferentes aspectos de la vida rural, de manera de contribuir a elaborar una descripción y comprender mejor los nuevos paisajes agrarios. Las líneas de investigación del NESA en este programa se sustentan en una hipótesis general, que refiere al carácter similar de las transformaciones que comienzan en el último cuarto del siglo XX, y se profundizan en la primera década del nuevo siglo, con aquellas que marcaron un tiempo a finales del siglo XIX a través de la introducción del alambrado y la mestización del ganado. En esta clave, el NESA trabaja sobre seis preguntas relacionadas con: Las consecuencias sociales de los cambios en el uso del suelo y en los modelos productivos; los efectos de la concentración y extranjerización de la tierra en la estructura agraria y social; los efectos de los cambios tecnológicos y organizacionales; las derivaciones en la sociedad rural de un uso intensivo de los recursos naturales; los procesos de precarización y de segmentación de los mercados de trabajo agrario; y finalmente, cómo estos cambios se relacionan con los modos de pensar, sentir y representar entre quienes habitan el mundo rural.

A escala global, se hace evidente que existe una presión creciente para que se produzcan alimentos y fibras, que se combina con una demanda inusitada por materias primas para la producción de biocombustibles. Las presiones del mercado mundial, producidas en particular por la incorporación como demandantes de economías emergentes, como las asiáticas y algunas latinoamericanas, decantan en un alza de precios que se augura que continuarán aumentando. Esta demanda de los productos agrícolas en el mercado internacional se tradujo en los países periféricos como impulso por expandir la frontera agrícola, para aquellos casos en que aún hubiese tierras que podían ser puestas en producción o aumentando la intensidad en el uso de la tierra. Uruguay no estuvo ajeno a estas tendencias y así se vislumbra, a partir de los años noventa, el incremento de varios fenómenos que progresivamente se acumularon decantando en un “paisaje diferente”. De un paisaje dominado por la ganadería extensiva a otro con vastas extensiones de cultivos de granos y plantaciones forestales, producción de biocombustibles, incorporación de grandes maquinarias, una gradual expulsión de población dispersa hacia las ciudades y pueblos pequeños, precios disparados de la tierra, extranjerización. Estos son algunos de los fenómenos que se han adicionado para mostrar hoy un mundo agrario radicalmente distinto del que había hace 50 años.

Este nuevo paisaje no podría haberse consolidado sin el auxilio de varios procesos convergentes, que interactúan entre sí. En primer lugar, cambios institucionales como la ley de promoción de la forestación de 1987; la modificación de la ley de arrendamientos para facilitar la cesión de tierras por períodos cortos; la eliminación de la ley que prohibía a las sociedades anónimas ser propietarias de tierra; la ley de promoción de la inversión extranjera directa; la ley de creación de los fideicomisos, etcétera. En segundo lugar, una creciente y abierta incorporación del capital financiero en el negocio agropecuario en las más diversas modalidades de operación. En tercer lugar, cambios organizacionales en el ámbito empresarial, con la creación de las “empresas en red”, que dotan al capital de una herramienta que permite una extraordinaria flexibilidad contractual. En cuarto lugar, una creciente tercerización del trabajo agropecuario en la que coexisten los contratistas que venden servicios en diversas tareas agrícolas, basados en la inversión que tienen en maquinaria y en su *know-how* para manejarlas, con los contratistas de mano de obra que utilizan sus redes

sociales para armar y manejar cuadrillas de trabajadores rurales. En quinto lugar, cambios tecnológicos en la agricultura y en la ganadería. En la primera, la llamada agricultura de precisión que combina semillas genéticamente modificadas con agroquímicos y nuevas maquinarias, que distan mucho de ser incorporaciones inocuas. Más bien, su difusión en forma de “paquetes” cuya efectividad queda sujeta a su incorporación integral, refuerza la dependencia de los productores con respecto al complejo agroindustrial de semillas y agroquímicos. En la ganadería, la trazabilidad vacuna, nuevos productos para la sanidad animal, el engorde a corral, etcétera.

La interacción de estos procesos arriba mencionados ha permitido un aumento extraordinario de las ganancias y la rentabilidad en la mayoría de las cadenas de producción de valor. Un fuerte debate se ha instalado hoy, en torno a la redistribución de estos beneficios y sobre su capacidad para abatir los índices de pobreza e indigencia. Ya que, si bien dichos índices han disminuido notablemente, no queda claro si (y cuánto) se debe a una redistribución entre capital y trabajo o a una redistribución por vía de las políticas sociales impulsadas desde el Estado.

Simultáneamente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (las computadoras, el acceso a Internet, el teléfono celular, etcétera) modificaron profundamente la operación de las empresas agropecuarias habilitando el uso de las más modernas herramientas de gestión. Estas tecnologías, sumadas a las mejoras en la caminería y la popularización de las motocicletas, impactaron en la demanda de trabajadores, en los modos de organizar la fuerza de trabajo y en las posibilidades de los propios trabajadores de vincularse y comunicarse con el medio urbano, modificando la frontera cultural campo-ciudad. Hoy es necesario redefinir “lo rural” si se quiere comprender las nuevas relaciones que se establecen entre los que moran en el campo y en la ciudad.

Así, el país combina la creciente explotación de nuevas tierras para la producción agrícola, y en particular para el cultivo de granos y oleaginosas, con el aumento de la productividad de la ganadería, que ha incrementado su producción y las exportaciones a pesar de haber perdido dos millones de hectáreas de su área. A esas producciones que se pueden concebir como más tradicionales, se ha sumado el impulso forestal con la política de subsidios iniciada en 1987 y que hoy supera el millón de hectáreas forestadas, a las que se añade la reconstrucción de toda la cadena agroindustrial forestal que está en proceso de consolidación en el país con la operación de dos plantas de producción de celulosa. Una señal extra en el impacto sobre los rubros, pesos relativos y modos de producción, lo constituye el impulso a la producción de biocombustibles, liderado por la empresa estatal de petróleo. Por un lado, la expansión de la caña de azúcar que, combinando un subsidio con fines de equidad con un motivo productivo, ha aumentado la producción de materia prima para la producción de etanol. Por otro lado, la construcción de una planta de biodiesel por la misma empresa, que demandará granos oleaginosos para su proyecto industrial.

En el centro de estas transformaciones, los precios de la tierra actúan como un claro indicador de las modificaciones en el mundo agropecuario. En la última década, el precio promedio de la tierra aumentó siete veces. Curiosamente, los precios de la tierra aumentan más, cuánto más grande es el predio que está siendo transado, sugiriendo claramente las características e intenciones del comprador. Así, para los predios más grandes (arriba de las 2.500 hectáreas) el precio promedio aumentó doce veces en la década mencionada. Este incremento en el precio de la tierra se tradujo directamente en modificaciones en la propiedad. Ante cotizaciones como las mencionadas, un productor rural pequeño o medio, o aún un estanciero que se encontraba endeudado, terminaron ofreciendo su tierra en venta a quienes tenían la capacidad financiera para comprarla.

A esta encrucijada signada por una tierra que se revaloriza, por la enorme presión de demanda de las materias primas y la expansión de sus capacidades productivas, y un contingente de productores locales que pierde la capacidad de detentarla, se adiciona un marco regional en el cual Uruguay aparece en perspectiva relativa como un oferente de “tierra barata”. Los precios de la tierra en Brasil son algo superiores, pero en la llanura pampeana de Argentina estos llegan a triplicarse con respecto a los de nuestro país.

El efecto es obvio y ampliamente conocido: concentración y extranjerización de la tierra. Los datos preliminares del reciente Censo Agropecuario 2011 muestran que si en el año 2000 había 57.131 explotaciones

agropecuarias, once años después quedaban sólo 44.890. Pero el 91% de las 12.241 explotaciones que desaparecieron tenían menos de 100 hectáreas de superficie. La imagen del proceso concentrador se acentúa cuando se advierte que, según el nuevo censo, las explotaciones con menos de 100 hectáreas siendo el 56% del total poseen sólo el 5% de la superficie, mientras que las explotaciones de más de 1.000 hectáreas siendo el 9% del total acumulan el 60% de la superficie.

Sin embargo, hay indicios que permiten sugerir que el efecto concentrador no se tradujo en el desplazamiento sólo de los pequeños productores, como en las décadas de los setenta y ochenta, sino que posiblemente también haya impactado en el desplazamiento de la burguesía terrateniente local. Así, la presión concentradora de las empresas forestales internacionales y el quiebre en 2002 de la lógica de licuación de deudas agropecuarias, vía políticas estatales de buena parte de los terratenientes nacionales, podría haber forzado a este sector a desprenderse de esas propiedades liberándose de sus no condonadas deudas y aprovechando el alza de precios. El impacto cultural de este cambio es indiscutible, estando en proceso de consolidación un nuevo estrato de propietarios de la tierra.

Con respecto al proceso de extranjerización de la tierra, los datos preliminares del Censo Agropecuario 2011 muestran que si en el año 2000 el 90% de la tierra estaba en manos de personas físicas de nacionalidad uruguaya, once años después esa cifra se redujo al 54%. En 2011, el 43% de la tierra estaba en manos de personas jurídicas, principalmente sociedades anónimas, por cuya razón no era posible saber la nacionalidad de sus propietarios. Sin embargo, por otros indicios, es posible suponer que, sin excluir la posibilidad de que en dichas sociedades haya accionistas de nacionalidad uruguaya, en su mayoría pertenezcan a ciudadanos y empresas de otras nacionalidades.

Esta reconfiguración de la estructura agraria posiblemente esté dando paso a una estructura social rural diferente, con nuevos estratos y nuevas alianzas, cuyo conocimiento es central para comprender el futuro de nuestra sociedad. En primer lugar, es necesario pensar en una modificación del mapa de actores en el campo uruguayo: tanto de los estancieros y de sus habituales prédicas en busca de rentas extraordinarias que deriven de la posesión de la tierra, como por la aparición de los sindicatos rurales, fortalecidos por el crecimiento del trabajo asalariado en el campo, así como por la lenta y prolongada declinación de la producción familiar.

Por último, el debate ambiental se incorpora como una cuestión de agenda en todas estas discusiones. La puja por la explotación de los recursos naturales, en una lógica netamente utilitarista, tiene impactos directos sobre estos recursos en el futuro. En esa clave, la rentabilidad de un sistema agroindustrial basado en los paquetes agroquímicos parece confrontar un modelo sustentable de "Uruguay natural".

El Uruguay hoy transita ambos caminos: mientras algunos lo ven como sistemas opuestos e irreconciliables otros buscan el camino del medio que permita producir más y mejor sin impactar irreversiblemente nuestros recursos naturales. ¿Existe ese camino? Esta es otra de las preguntas que nuestra sociedad tendrá que responder en los años futuros. (Moraes y Piñeiro, 2008, p. 109)

Los elementos señalados evidencian que el medio agropecuario está sufriendo cambios radicales y que estos impactan de manera directa en el proyecto de desarrollo del país. En consecuencia, analizar las formas que están tomando estos cambios, así como su compatibilidad con estrategias que le den viabilidad al sector sin sacrificar los recursos naturales, la mano de obra ni los fenómenos sociales que se dan en los territorios, parece un tema obligado para quienes desde la academia quieren contribuir a su comprensión. En particular, lo que acaece con el uso de la tierra, en términos productivos y de su propiedad, la sustentabilidad de los modelos, y los impactos sociales que tienen sobre las estructuras sociales y las sociedades locales, son aspectos sobre los que es necesario reflexionar.

Con el presente *dossier* se propone abordar algunas de las preguntas formuladas, a partir de la experiencia empírica de procesos de investigación desde distintas disciplinas, y sobre diversas realidades, en relación con las grandes transformaciones mencionadas anteriormente.

Alejandra Gallo e Irene Peluso, apoyándose en bibliografía existente y en un estudio propio realizado en establecimientos ganaderos familiares, bucean en el complejo proceso que hace a la sucesión familiar (distinguiéndola de la herencia de los activos), mostrando cómo dicho proceso se inicia desde las primeras etapas de socialización de la nueva generación. Al introducir la perspectiva de género en su análisis, descubren la tendencia de los padres a elegir a uno de los hijos varones como el sucesor, estimulando su interés en las

tareas productivas y desestimulando actividades fuera del establecimiento. A la inversa proceden con las hijas mujeres, compensándolas en la medida de lo posible con el apoyo a la continuación de los estudios que a la larga conducirá a su inserción urbana y el abandono de la explotación. Este análisis también permite realizar una lectura diferente para comprender el proceso de desaparición gradual de las explotaciones de carácter familiar. Porque, si bien este proceso se mira con más frecuencia desde el lado de la demanda de tierra por parte de actores agrarios o extra agrarios, también es necesario preguntarse por qué tantos productores familiares deciden desprenderse de sus establecimientos. El artículo de Gallo y Peluso, al explicar la complejidad del proceso de sucesión y su dilatada extensión en el tiempo (desde que nacen los hijos hasta que la generación de los padres decide retirarse), sugiere que podría ser una de las razones por las que podrían estar generándose fracasos en los procesos sucesorios, que contribuirían a explicar la alta tasa de ventas de los establecimientos familiares.

Carámbula, Figueredo y Bianco presentan un artículo basado en estudios de caso en Paysandú y Soriano, en el cual reevalúan el papel de los intermediarios entre capital y trabajo. Estos actores han recibido distintos nombres en los estudios agrarios de América Latina, pero en nuestro país se los conoce más bien como “contratistas”, ya sea de maquinaria o de trabajadores rurales. Los autores sugieren que estos contratistas, en realidad, deberían ser caracterizados como nuevos empresarios que realizan actividades tercerizadas para las empresas madre, o sea, las empresas agropecuarias que contratan sus servicios. Al mismo tiempo, reconocen la existencia de empresas de servicios muy distintas en tamaño, volumen de capital, cantidad de trabajadores, las formas contractuales con las empresas madre, en las formas contratación de los trabajadores, en el liderazgo tecnológico, etcétera. El artículo sugiere que las empresas de servicios se crean por necesidad de las empresas agropecuarias, ya sea por su aversión a invertir en capital fijo (maquinarias), por la necesidad de trasladar a las empresas de servicios sus oscilaciones en la demanda de trabajo a lo largo del año o sus desproporcionadas necesidades de trabajadores no calificados y calificados, o por su necesidad de desplazar trabajadores a distintos puntos del territorio, etcétera. De esta manera, el artículo también hace una contribución al debate (muy necesario) de la nueva estructura social en el campo uruguayo. En este caso, por la emergencia de un tipo social que es un empresario que trabaja en actividades agropecuarias pero que no posee tierra. Su presencia desdibuja y obliga a flexibilizar la mirada de una estructura social agraria que ha estado basada principalmente en la posesión o no posesión del recurso tierra.

Joaquín Cardeillac presenta un artículo que tiene como objetivo el análisis de los factores que inciden en que un hogar esté por debajo de la línea de pobreza medida por ingresos. Este tema está en el centro de muchos debates actuales en los cuales se interrogan acerca de cuánto del actual crecimiento del sector agropecuario está revirtiendo en aquellos que viven y trabajan en el campo. Para ello, basándose en los datos que arroja la Encuesta Nacional de Hogares 2000, 2006 y 2009, lleva a cabo un exhaustivo y complejo análisis de una serie de 26 indicadores y su relación con la probabilidad de que un hogar fuera clasificado como pobre según el método de la línea de pobreza. El modelo de efectos principales detectó que no existe relación entre cinco variables (dependencia del hogar del sector primario, capacidad de usar redes sociales y movilidad territorial, entre otros) y la probabilidad de estar bajo la línea de pobreza. Para el resto de las variables estudiadas sí existe relación con la probabilidad de que un hogar sea pobre: obtener ingresos de un predio agropecuario, el tamaño del hogar, la ocupación del jefe del hogar, la posesión de una vivienda, etcétera, lo que hace concluir al autor que las titularidades y el acceso a capital físico tendrían mayor importancia en la disminución de la pobreza que el acceso a alguna forma de capital social. El acceso a la educación, el trabajo femenino complementario, la percepción de ingresos por un empleo público y una mayor edad promedio de los integrantes de la familia son todos factores que influyen en disminuir la probabilidad de que un hogar esté en situación de pobreza. En un segundo análisis, el autor relaciona la posibilidad de los hogares agrodependientes de estar bajo la línea de pobreza, según tres puntos en el tiempo: años 2000, 2006 y 2009. Estos tres momentos son bien diferentes desde el punto de vista de los resultados económicos del sector agropecuario. En el primer punto, se está bajo la presión de la devaluación de la moneda brasilera (1999), siendo Brasil nuestro principal comprador. En ese momento, el endeudamiento del sector agropecuario era ya más grande que el PBI sectorial. Numerosas voces alertaban sobre una situación comprometida. No en vano, ese fue el año en que se llevó a cabo lo que ha sido posiblemente la mayor protesta pública de los productores agropecuarios en la historia del país (Piñeiro, 2004).

El segundo momento, pasada ya la brutal crisis económica y social con epicentro en el año 2002, que abarcó a todos los sectores económicos, el 2006 se corresponde con una situación en que el sector agropecuario lideraba la recuperación económica con excelentes tasas de crecimiento. El tercer punto, año 2009, ya la economía en su conjunto crecía a tasas sin precedentes, pero otros sectores crecían más rápido que el sector agropecuario. Con este panorama, no resultan extrañas las conclusiones del autor. En el primer punto, los hogares agrodependientes tenían mayores probabilidades que los no agrodependientes de estar bajo la línea de pobreza. Esa relación se invierte para el punto siguiente (año 2006) mientras que en el año 2009 los hogares agrodependientes tienen nuevamente una leve mayor posibilidad de estar bajo la línea de pobreza que los hogares no agrodependientes. Estos resultados refuerzan la idea de la importancia del contexto macroeconómico (y no sólo el desempeño económico del sector), por su influencia en la posibilidad de que un determinado sector de la población caiga bajo la línea de pobreza.

Los organizadores del *dossier* invitaron a participar en él a destacados académicos que estudian procesos similares que estarían ocurriendo en las agriculturas de los dos países vecinos: Argentina y Brasil. Las similitudes de nuestros ecosistemas, las mismas vocaciones agropecuarias, una historia rural en común hacen que sea lógico esperar situaciones similares a las relatadas para el caso uruguayo en dichos ambientes. En esta clave, se presentan dos artículos de investigadores de dichos países.

Como lo han hecho notar estudios previos (Gutiérrez, 2009; Errea *et al.*, 2011; Arbeleche y Carballo, 2007), la agricultura empresarial dedicada a la producción de granos en secano en Uruguay toma su modelo de un desarrollo similar de las empresas de agronegocios de la agricultura pampeana. En realidad, ese modelo es traído por empresarios argentinos que, diversificando sus inversiones, se instalan tempranamente en el litoral oeste de nuestro país. Es por ello que el artículo de Carla Gras cobra mucha importancia para comprender y establecer comparaciones con el desarrollo de los agronegocios en Uruguay. En dicho artículo, partiendo de un estudio de caso de 26 empresas de agronegocios, Gras identifica dos tipos de empresas distintos. En el paradigmático modelo de empresa en red, se aúnan el conocimiento, el capital financiero, las grandes escalas y un “*management* profesionalizado”, y se conjugan distintos actores vinculados por sistemas contractuales formalizados. La propiedad efectiva de la tierra juega un rol secundario. En este modelo se encuentra un número restringido de megaempresas que administran más de 100.000 hectáreas. Por otro lado, las empresas agrícolas “tradicionales”, en las que la tierra propia juega un papel más importante que en el modelo anterior, aunque no suelen operar en red, sí aplican algunos de los conceptos y modalidades de la organización en red. Gras encuentra dos subtipos. Las empresas “tradicionales” grandes, que tienen entre 10.000 y 20.000 hectáreas, y las empresas “tradicionales” medianas, que tienen menos de 10.000 hectáreas en propiedad. Las diferencias entre unas y otras no se restringen a la superficie que poseen, sino que también hay modalidades diferentes de organización del trabajo, de vínculo con el capital financiero, de gestión de la empresa, etcétera. Además, Gras encuentra que las empresas medianas tienen mayores dificultades de acumulación de capital y una mayor vulnerabilidad ocasionada por el incremento en el precio de la tierra. En síntesis, la autora rescata la idea de la heterogeneidad en los tipos de empresas agrícolas, cuyo conocimiento y comprensión son necesarios para pensar el rumbo futuro de la agricultura pampeana. La lectura de este artículo permite extraer enseñanzas acerca de la forma de analizar al empresariado agropecuario en nuestro país, con el que sin duda se encontrarán similitudes y diferencias.

El artículo de Neske, Almeida y Radomsky se inserta en este *dossier* desde una mirada más profunda y removedora. Cuestiona el mismo concepto de desarrollo que está presente —aunque no necesariamente enunciado— en los análisis de los cambios económicos, sociales y culturales que están ocurriendo en la sociedad rural de nuestro país. Estos cambios, ¿traen desarrollo?, ¿o sólo producen crecimiento económico sin mejorar las condiciones de equidad social? Los autores denuncian las teorías de la colonialidad del poder: la idea del desarrollo ha sido construida a partir de las concepciones dominantes de la modernidad. Afiliándose a la corriente de pensamiento de los estudios poscoloniales, afirman que no hay (no tiene por qué haber) una única forma de concebir el desarrollo, tal como fuera enunciado por la teoría de Rostow —y continuada por otras versiones posteriores más elaboradas—, sino que a él se puede llegar por múltiples formas y por distintos caminos. Al analizar el caso del Alto Camaquã, en la región meridional del Estado de Rio Grande do Sul, muestran cómo la forma única de concebir el desarrollo hace que los territorios sean clasificados en

desarrollados o subdesarrollados, existiendo para estos últimos una receta que se concibe y se aplica casi siempre de la misma forma, cuando tal vez otros caminos sean posibles para lograr un verdadero desarrollo.

Los artículos que el lector tiene en sus manos muestran también hasta qué punto —como ha sido otras veces en la historia del país— estos cambios son impulsados por vectores externos, provenientes de nuestros fuertes vínculos con el mercado mundial, y hasta dónde por variables endógenas que resisten o modifican su curso, o que proponen otros caminos. En síntesis, este número de la *Revista de Ciencias Sociales* pretende ser un aporte para una mejor comprensión de las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad rural.

*Diego E. Piñeiro*

Investigador responsable del Núcleo de Estudios Sociales Agrarios.  
Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales.

### **Referencias bibliográficas**

- Arbeleche, Pedro y Carballo, Carolina (2007) *Los cambios en la agricultura de secano del nuevo siglo en Uruguay y sus consecuencias*. Montevideo: Facultad de Agronomía- UdelaR.
- Errea, Eduardo *et al.* (2011) *Transformaciones en el agro uruguayo: nuevas instituciones y modelos de organización empresarial*. Montevideo: Facultad de Ciencias Empresariales-Universidad Católica del Uruguay.
- Gutiérrez, Gonzalo (2009) *Análisis de las cadenas basadas en la producción de granos de secano para la definición de lineamientos de políticas específicas*, FAO-URU/TCP-3103. Montevideo: FAO.
- Piñeiro, Diego E. (2004) “Rentabilidad o muerte: la protesta rural en el Uruguay”, cap. IV, en *En Busca de la identidad: la acción colectiva en los conflictos agrarios de América Latina*. Buenos Aires. CLACSO, pp. 253-294.
- Piñeiro, Diego E. y Moraes, María Inés (2008). “Los cambios en la sociedad rural durante el siglo XX”, en *El Uruguay del siglo XX*, tomo III. Montevideo: Departamento de Sociología-Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR: Banda Oriental, pp. 105-136.